

Chile otro año electoral definitivo

Zajer, Mary

Mary Zajer: Periodista chilena. Fue jefa de redacción de la revista *Cauce* de Santiago. Actualmente, corresponsal de publicaciones extranjeras.

Para el 14 de diciembre de 1989, Chile se apresta a protagonizar el segundo tiempo de la confrontación que el 5 de octubre de 1988 liquidó las pretensiones del general Pinochet de proyectarse en el poder por otros ocho años. El rechazo sufrido por el régimen, que perdura desde 1973, le permite ahora a la oposición el uso de un mecanismo positivo, como son las elecciones libres de este fin de año, un corolario del plebiscito, donde volverán a enfrentarse las fuerzas democráticas con la dictadura, que aún no guarda sus bayonetas y sigue siendo el elemento ordenador de la situación chilena.

El «efecto 5 de octubre» determinó un nuevo cuadro político en el país, sede de la última dictadura de seguridad nacional del continente. Por un lado, quedó en evidencia la unidad de las fuerzas de oposición agrupadas bajo el «arcoiris» que ilustró la campaña del NO y por otro, la división del bloque oficialista, que apostó al continuismo.

Con la derrota a cuestas, el veterano general Pinochet va a permanecer hasta marzo de 1990 en el poder, enfrentando a una oposición básicamente unida que exige reformas a la Constitución de 1980, la misma que le permitió gobernar con poderes omnímodos, que establecía la convocatoria a un plebiscito que perdió y que le otorga esta caída en cámara lenta durante más de un año. Lapso que la oposición emplea en proyectar un programa presidencial, definir la naturaleza del próximo gobierno, resolver las listas parlamentarias en todo el país para elegir el futuro Congreso y estudiar cómo pagar la deuda social, en una nación de 12 millones de personas, de las cuales 5 millones 600 mil subsisten en extrema pobreza¹. Lapso, además, de establecer conversaciones entre los diferentes partidos que forman la Concertación Democrática, en que confluyen 17 agrupaciones políticas - partidos de la derecha democrática, centro e izquierda -, para designar al candidato presidencial de entre cuatro aspirantes proclamados: el independiente Alejandro Hales, presidente del Colegio de Abogados; el demócratacristiano Patricio Aylwin, vocero de la propia Concertación Democrática; el radical (socialdemócrata) Enrique Silva Cimma, ex-Contralor General de la República; y Eugenio Velasco, ex-Decano de la

¹Estimación de economistas de la Universidad Católica de Santiago, 1988.

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, también de tendencia socialdemócrata.

En medio de este panorama, el oficialismo pinochetista - y el propio general Pinochet - insisten en remontarse al pasado, en discursos y apariciones públicas, exigiéndole «definiciones» a la oposición, especialmente en el plano económico (estatismo o libre empresa), tratando de echar mano a mecanismos de la campaña del terror que vaticina vueltas a un pasado sombríamente deformado, mientras que la Concertación Democrática insiste en mirar al futuro y en plantearle al país, dentro de los espacios que ha ido ganando, que el próximo gobierno de transición de cuatro años estará basado en la concertación social, y que tendrá un carácter suprapartidario donde, a partir de los acuerdos entre las 17 organizaciones, el nuevo presidente gobernará en función de un programa común, acordado de cara al país.

Pero, hacia fines de marzo de 1989, un nuevo elemento vino a alterar este cuadro: el colapso en el sistema exportador frutícola. Las exportaciones «no tradicionales» exaltadas por los economistas del régimen como uno de los mayores logros de la economía social de mercado, sufrieron su propio shock por culpa de unas uvas envenenadas descubiertas en EEUU, afectando a todos los sectores del país. De hecho, el asunto desplazó a los importantes debates que se iniciaban sobre las reformas a la Constitución en algunos de sus aspectos más rígidos, para lo cual Pinochet había retirado su veto de meses anteriores, mientras su ministro del Interior, Carlos Cáceres, invitaba a dos precandidatos de la oposición, Patricio Aylwin y Enrique Silva Cimma, a La Moneda, el palacio presidencial, a conversar sobre el tema. Entre el estallido de la «crisis de la uva», las reformas constitucionales y la precampaña electoral, el país político continuó recomponiéndose.

Enfrentados

Los efectos mesurables del plebiscito demuestran que la derrota del 5 de octubre de 1988 dividió al bloque oficialista en dos componentes. Por un lado se aprecia a un grupo más nostálgico, que se atrincheró en una «lógica de bunker», y que va a tratar de mantener hasta el final las reglas del juego establecidas y lo esencial del modelo autoritario, en lo económico y en lo político. Este grupo está estructurado en torno a Pinochet, su principal sostenedor, y en términos políticos involucra a Avanzada Nacional, el partido pinochetista por antonomasia, y a un sector de empresarios y de ex-militares, organizados bajo el nombre de Centro Democrático Libre, cuya cabeza es el general (r) Luis Danús, donde también están los economistas más intransigentes y rígidos del régimen, como Alvaro Bardón, actual presidente

del Banco del Estado y Alvaro Vial, director del Instituto Nacional de Estadísticas. Luego, hay un segundo núcleo más aperturista, que quiere dar un viraje en la dictadura y constituirse en su sucesor a mediano plazo: es el partido Renovación Nacional, liderado por el ex-ministro del Interior Onofre Jarpa, junto al joven abogado Andrés Allamand, que pretende hacer reformas constitucionales antes de las elecciones y está dispuesto a competir en un proceso pluripartidista, entendiendo que el tiempo de la dictadura concluyó y que hay que mirar al futuro y, sobre todo, separar aguas de Pinochet y su régimen, para poder tener capacidad de triunfo electoral. La apuesta de este grupo es llegar a constituirse en el sector más fuerte de la derecha, logrando el mayor número de parlamentarios. Aunque pierdan las elecciones presidenciales, consolidarían así su condición de fuerza derechista principal, levantando una alternativa de poder desde ese sector, fuerte y competitiva a mediano plazo.

En medio de esos dos grupos, existe un sector que ha sido importante inspirador de algunos planteamientos ideológicos de Pinochet: la Unión Demócrata Independiente (UDI), encabezada por Jaime Guzmán y los antiguos gremialistas, que están a medio camino entre las otras dos posiciones, aunque tienden a acercarse más a Avanzada Nacional. Por instinto electoral, saben que el continuismo es hoy la peor carta y buscan una solución intermedia. Esa es también la posición de la mayoría del empresariado, otro sector diferenciable en la derecha chilena, que ha buscado una vía, que le permita reunificar a su favor, y no de Jarpa, a todo ese mundo conservador. Su carta es Hernan Büchi, que fue ministro de Hacienda del régimen hasta el 3 de abril de 1989. La táctica que han adoptado es separarse de todo lo relativo al modelo político pinochetista y las constantes violaciones a los derechos humanos, para mantener flameando su modelo económico, "Intransable, esencial, inmodificable". Con esa propuesta, al parecer, han descolocado a Renovación Nacional, que no ha tenido la capacidad de levantar un candidato presidencial mejor que Büchi. Probaron con Sergio Diez, ex-embajador de Pinochet en la ONU; ahora están lanzando como globo de prueba el nombre de Arturo Alessandri Besa, en un impulso por ganar el «mercado político» pinochetista antes de que se imponga Büchi.

El colapso económico que significó el corte de las exportaciones de frutas a los EEUU va a tener impacto negativo en la imagen del ex-ministro de Hacienda (Büchi), quien no ha podido todavía marcar su diferencia con Pinochet y hacer clara su decisión - si la tiene - de no compartir más tarde el poder con él ni aceptar su tutela - si llegara a triunfar. Para el precandidato Alejandro Hales, al slogan de Büchi, con el que han empapelado autos y esquinas en Santiago, «Büchi es el hombre», le faltan dos palabras «Büchi es el hombre de Pinochet». Y agrega que su carrera, ligada

a la de los Chicago Boys, es una cuenta que el país le cobrará. No sólo por la fragilidad de la economía, evidenciada recientemente, sino, como asegura Luis Maira presidente del Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS), «porque las variables económicas y políticas se entrecruzan y vemos los costos de la actual política exterior, de la violación de los derechos humanos y de la no cooperación en el caso Letelier (el ex-canciller de Allende asesinado en Washington), todos los cuales están indirectamente implicados con el problema en las exportaciones de fruta, de algún modo». De no haber cambios tajantes en los próximos meses, Büchi aparece cada vez más como el candidato de Pinochet. Ahora que éste se muestra reacio a dejar la Comandancia en Jefe del Ejército, Büchi garantizaría la continuidad del régimen, según el cálculo de los estrategias civiles del gobierno.

Cuadro opositor

En el otro lado de la confrontación se ubican los 17 partidos que conforman el arcoiris opositor, uno de cuyos rasgos es la heterogeneidad, formado, como está, por la derecha democrática, la democracia cristiana, el socialismo renovado, el socialismo marxista, radicales, socialdemócratas, los jóvenes humanistas y los «verdes» ecologistas, además de dos partidos instrumentales, el Partido por la Democracia (PPD), que lidera el abogado y economista Ricardo Lagos, quien impactó al público chileno al atreverse a desafiar a Pinochet ante las cámaras de televisión en un foro político antes del plebiscito, y el que mantiene un liderazgo con proyecciones futuras, y el Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS), que reúne a la «izquierda histórica», incluyendo a los socialistas marxistas y al hasta ahora ilegal Partido Comunista. Todos conformaron un frente común, que determinó el triunfo de la oposición en el plebiscito, y que enfrentará en igual forma las elecciones presidenciales a fines de 1989.

En el caso hipotético de una división en la oposición, muchos políticos temen que se llegue a dar en Chile un escenario parecido al de Corea del Sur, en que un candidato oficialista pudo ganar y proyectar el régimen anterior al tener al frente a una oposición escindida. De ahí que los opositores chilenos insistan en mantener la unidad para poder ganar por un amplio margen la elección presidencial en la primera vuelta, con un candidato único, y también obtener en esa misma elección el 60 por ciento de los cargos de diputados y senadores que están en juego, para que el gobierno de transición pueda luego modificar la Constitución y reformar todo el andamiaje jurídico de la dictadura.

La agenda política de las fuerzas opositoras para el presente año contempla tres puntos básicos:

1) Definir el programa de gobierno, punto sobre el que existe un mayor acuerdo, donde se explique a los chilenos cómo va a cambiar su situación en los próximos cuatro años; el significado de la democracia en cuanto a empleo, salud, educación, vivienda, marcando las diferencias con el modelo dictatorial «que es un modelo concentrador, que privilegia a los más ricos y a los sectores más influyentes». Esto hay que decírselo con toda claridad a los sectores medios y a los grupos más pobres, señalan sus impulsores.

2) Procedimiento de designación del candidato, ya sea cónclave, asamblea o convención. En este punto, existen divergencias, porque mientras algunos quieren que la nominación se resuelva a nivel de directivas políticas, los independientes sostienen que las bases sociales - los movimientos sociales, etc. - deben incorporarse a la gestación de la candidatura de oposición. Gutemberg Martínez, secretario general nacional de la Democracia Cristiana, que postula a Patricio Aylwin, afirma que la decisión debe emanar de los presidentes de los 17 partidos de la Concertación opositora, porque otro tipo de procedimiento no sería claro ni posible, dado que no existen resultados electorales diferenciados que permitan dirimir objetivamente la representación de cada partido político. Por ello, a su juicio, la decisión mancomunada de las cúpulas es lo que más se ajusta a la realidad actual, para no generar nuevos problemas. En todo caso, los cuatro precandidatos de la oposición están dispuestos a apoyar al designado, porque no existen descalificaciones a priori, ninguno ha mostrado actitudes negativas, ni hay rigidez; «es una campaña limpia, y conductas flexibles y patrióticas, donde prima el respeto e incluso el afecto, son las prevalecientes».

3) Resolver las listas parlamentarias en todo el país. Se elegirán 120 diputados y 26 senadores, si la cifra no varía por las reformas constitucionales que se discuten, lo que significa que el gobierno - en el actual sistema electoral, hecho a su medida - con sólo el 33,4 por ciento de los votos, podría apropiarse del 50 por ciento de la representación. Esto funciona así: cada distrito electoral elige dos diputados, y cada región, dos senadores, de tal manera que, en cada circunscripción, si la votación progobierno alcanza el tercio más uno de los sufragios (Pinochet logró un 43 por ciento en el plebiscito de 1988), obtiene uno de los cargos - el 50% de la representación -, a menos que, y a contrario sensu, las fuerzas de oposición superen los dos tercios de los votos, es decir, el 66,7 por ciento, en cuyo caso ganarían ellas los dos asientos, lo que es prácticamente imposible si se presentan en listas separadas, y

muy difícil incluso si se integran en una lista única. (En 1988 llegaron al 54,3 por ciento). El desafío que tiene la oposición frente a este cuadro es, precisamente, hallar una fórmula de compensaciones para apoyar en cada distrito a una sola lista, para no dispersar y desaprovechar su mayoría, y hacerla efectiva si asciende hasta el 66,7 por ciento de los votos. La tarea es de por sí compleja, máxime cuando se trata de conciliar los intereses de muchas organizaciones partidarias diferentes. Todavía no se ha logrado un entendimiento básico para alcanzar la meta de la lista única. Es un tema pendiente en la oposición. Entretanto, la izquierda y demás partidos del arco opositor, verían con buenos ojos una decisión de la Democracia Cristiana de buscar una representación parlamentaria semejante a la que correspondería en un sistema proporcional; si sus líderes estuvieran dispuestos a limitar sus expectativas a una cantidad fija de parlamentarios, del orden de un tercio de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados - se ha llegado a decir -, dejarían margen para que a los dos tercios restantes fueran postulados candidatos de otras tiendas opositoras, mediante un procedimiento de cuotas, que debe determinarse en laboriosas negociaciones.

El precandidato Enrique Silva Cimma advierte que «frente a la confusión de la derecha, la oposición tiene el panorama bastante más claro, aun cuando la prédica de los medios de comunicación del régimen trata de exhibir una oposición dividida, lo que no es cierto. Tenemos la unidad como línea determinante, en esta etapa y en la próxima transición. Un período que será difícil, pero creemos que existe un grado cada vez mayor de unidad, sensatez y cordura para actuar. Es mucho lo que hay que rehacer y habrá que exigir una cuota enorme de sacrificio compartido, con un sentido fundamentalmente pragmático de las medidas que haya que adoptar». En la Democracia Cristiana, Gutemberg Martínez se manifiesta en los mismos términos, especificando que «la futura democracia debe nacer muy sólida, con capacidad de estabilizarse, lo que requiere el máximo de apoyos. Porque ni sabemos cómo nos van a entregar el gobierno; hay demasiadas nebulosas, como el estado de las finanzas públicas, que simplemente no se conoce. De ahí que los elementos centrales serán recuperar algunos aspectos de la actual política económica y reforzar el crecimiento, agregándole la variable justicia social. Eso se tiene que traducir en políticas concretas, como el manejo tributario, el tratamiento de la deuda externa, procesos destinados a generar empleo, como la industrialización y el estímulo a la pequeña y mediana empresa. Lo fundamental es incluir la variable justicia social».

Otro precandidato, Alejandro Hales, exhibe cifras abismantes sobre la brecha salarial, entre los más altos y más bajos sueldos, que es hoy en Chile de 1 a 143; en Suecia, de 1 a 4, y en Inglaterra de 1 a 12. «El país no puede seguir aceptando esta si-

tuación, donde además los jubilados ven reducidas sus pensiones, los profesores son exonerados, hay cesantes en todas las ramas, deudores hipotecarios cada día más endeudados... En un esquema social injusto, se requiere hablarle al pueblo con mucho realismo y franqueza, sobre el nuevo gobierno democrático, porque tantas demandas no se podrán solucionar en un corto plazo».

Propuestas demócratas

A no mediar sorpresas de última hora, el panorama electoral chileno pareciera concentrarse en un enfrentamiento gobierno oposición, y esta última tiene conciencia de que va a ganar, cualquiera sea su candidato... si es único. Encuestas recientes señalan que Patricio Aylwin (PDC) es el abanderado opositor que sacaría más ventaja al mejor postulante de la derecha, Hernán Büchi, y el dato más interesante es que lograría superar la votación del NO en el plebiscito (54,3 por ciento), mientras Büchi obtendría menos apoyo que el 43 por ciento de Pinochet el 5 de octubre de 1988.

Los observadores consideran que, por ahora, habría que descartar las posibilidades de un veto militar póstumo. Hay un repliegue ordenado de las fuerzas armadas a sus funciones específicas; han cambiado los mandos militares, se han tomado medidas después del plebiscito, sacando de las filas a las figuras más politizadas, reponiéndose una cierta imagen de profesionalismo; dejando intactos a la estructura y el mando. Muchos políticos han interpretado la entrevista de Pinochet con el diario *Le Monde*, donde anunció que, como Cincinnato (al que confundió con Venancio) se iría a arar la tierra, como un claro mensaje: «me voy, pero volveré». El cómo y el cuándo están más allá del horizonte de marzo de 1990 (cuando asuma el gobierno electo). Al parecer, Pinochet se ha resignado a un período de democracia intermedio y espera que el próximo sea un gobierno desastroso, que no tenga ninguna posibilidad de manejo político, para lo cual él mismo está dejando deliberadamente una serie de dificultades económico-administrativas que, en un cuadro de crisis, pudieran crear las condiciones para una nueva salida de fuerza. Hipótesis a largo plazo. Otros, más optimistas, piensan que Pinochet impulsa entusiastamente un próximo gobierno de cuatro años una de las reformas por él mencionadas -, para volver al poder a su término, con 78 años y una opinión pública volcada a su favor, luego de las fallas y desajustes que espera ocurrirán en el gobierno democrático. La realidad actual y presente, sin embargo, es que el plebiscito le sepultó las posibilidades de manejo en el juego corto. «Toda su táctica era dividir y en la medida en que nos mantengamos unidos, no tiene juego», expresa el opositor Luis Mai-ra.

Las propuestas de la oposición para la nueva democracia, que ya se vislumbra y que surgirá después de 16 años de una implacable dictadura, están en el programa de gobierno que discuten sus partidos integrantes y que engloba la forma de encarar la deuda social que deja la dictadura, primera prioridad para lograr respaldo a su gestión. Los integrantes de la Concertación de partidos políticos opositores están conscientes de que el gobierno democrático tendrá que ser fuerte en educación. «Descuidada en extremo, se la ha municipalizado, degradándola. Se ha mercantilizado la educación superior, con la aparición de universidades fantasmas, que van en contra de la tradición del sistema educacional chileno de fuerte conducción estatal, de alta excelencia y con gran fiscalización de parte de la autoridad pública. Acá se ha puesto la educación en el mercado como una mercadería más. El futuro gobierno va a tener que reponer un sistema nacional de educación, aumentar el gasto, racionalizar y ofrecerle expectativas a la gente. Educación de buena calidad y accesible, como fue históricamente en Chile, sin desmedro de que sigan existiendo colegios privados y caros», anuncia el Partido Radical.

La salud es otro derecho que se ha deteriorado en Chile. Los políticos opositores concuerdan en que hay que resucitar un sistema nacional de salud para los sectores medios y los de escasos recursos, sin perjuicio que se mantenga una atención de salud privada para los grupos de mayores ingresos.

Vivienda es otro de los rubros que requieren atención inmediata. Los primeros diez años de la dictadura registraron total inacción en este campo, con un déficit acumulado hoy de un millón de viviendas.

Otro de los temas más discutidos es el del empleo. La oposición se ha comprometido a garantizar empleos relativamente estables y con remuneraciones básicas fijadas por ley. Actualmente, el salario está librado a la lógica del mercado; se han desmantelado las organizaciones sindicales y están suprimidas las facultades legales para que los trabajadores puedan defender sus derechos. En la práctica, los trabajadores han sido las víctimas principales del modelo económico neoliberal de la dictadura; perdieron sus organizaciones y las que existen hoy conservan un poder mínimo de negociación. La reciente crisis de las exportaciones frutícolas deja a más de 12 mil trabajadores cesantes en el agro, donde se los contrata de lunes a viernes y, opcionalmente, se les vuelve a contratar el lunes. Con este sistema de «temporeros» se edificó el andamiaje de esta rama del «milagro económico». La legislación laboral ha desaparecido bajo Pinochet y se ha transformado en un Plan Laboral «que anula el derecho de los trabajadores, donde desaparece la estabilidad y la seguri-

dad social; es una parodia de los derechos de los trabajadores», afirma el precandidato Silva Cimma.

Una transición difícil

Comisiones de técnicos de los partidos adversarios a la gestión de Pinochet han estado buscando fórmulas para generar recursos económicos, en un serio esfuerzo por reacomodar la economía después del reemplazo del régimen. Además de destinar parte importante del valor de la exportación de cobre a inversiones básicas, proyectan iniciar desde ya conversaciones en países del Norte para allegar nuevos recursos. La oposición está actuando asesorada por un «estado mayor» técnico, que ya dio muestras de madurez y responsabilidad antes y durante el plebiscito, y que en la actualidad parece moverse con el mismo tino, tratando de mantener unida a toda la oposición en torno a propuestas técnico-administrativas comunes.

Los líderes opositores saben que ésta será una de las transiciones más difíciles de la historia, porque hay todo un componente de violencia en la sociedad que va a desatarse una vez que se logre la disolución de los cuerpos represivos, como la CNI, grupos paramilitares, fuerzas violentistas de derecha, a las que se agregan las organizaciones de extrema izquierda del mismo signo y muchos otros grupos pequeños, que buscan aún una salida militar y no política a la crisis. La Democracia Cristiana propone tareas masivas de educación democrática, dirigidas especialmente a las nuevas generaciones, para terminar así con la lógica amigo-enemigo, predicada por el régimen, respetando las diversas ideas y como un intento de rescate de valores perdidos en los 16 años de dictadura.

A eso hay que agregar el peso de las organizaciones sociales, cuyas demandas contenidas todo este tiempo, inevitablemente se van a expresar. Las violaciones y atropellos a los derechos humanos están inventariados en Chile. Ello dificulta que haya un «perdonazo»; por el contrario, la próxima democracia tendrá que encarar innumerables peticiones de justicia. Todos estos factores hacen que la oposición tome a diario conciencia de lo difícil que será «recrear un país para todos los chilenos», como proclama uno de sus slogans. Pero ese es el desafío.

Los partidos de la izquierda actúan en estos meses en forma flexible, anunciando que no harán demandas de «cuoteo» en las instituciones públicas, al reinstalarse la democracia, y que por el contrario pondrán todas sus capacidades políticas y técnicas a disposición del gobierno democrático, para que cumpla con el objetivo básico de restaurar un Estado de derecho.

Al respecto, surge inevitablemente la cuestión del rol futuro del Partido Comunista. Luis Maira, presidente del conglomerado partidista donde participa el PC, señala que todos los partidos están de acuerdo en que los comunistas tengan un espacio en la futura democracia chilena, y que «es de esperar que éstos vuelvan a su tradición de fuerza política que basa sus métodos en la lucha social y de masas. No creo compatible un modelo de fuerza militar propia con una transición a la democracia. Y el PC es una fuerza importante en Chile; por lo mismo, no va a ser ajeno a las tendencias que van a surgir de la mayoría de la sociedad chilena y que van a marcar un sólido camino democrático. El PC volverá a ajustar su comportamiento; sería trágico que no lo hiciera».

Otro punto bajo análisis es la vigencia de los partidos instrumentales, especialmente el PPD de Ricardo Lagos, así como el más reciente PAIS. Algunos vaticinan que quedará en claro su carácter temporal y que los partidos afines encontrarán otras formas de entendimiento político y electoral, como siempre fue en la historia de Chile, con un espectro reordenado en la democracia, donde reaparecerá una derecha fuerte, un centro sólido y una izquierda también fuerte.

El hecho es que la democracia ya viene. El proceso no será fácil, pero muchos hacen suya la reflexión de un cientista político, quien después de tantas miradas retrospectivas y análisis presentes, concluyó en que «fuimos los primeros en hacer la vía pacífica al socialismo y cometimos todos los errores y pagamos todas las experiencias, pero vamos a ser los últimos en hacer la transición de la dictadura a la democracia en América Latina, y algo, entretanto, hemos podido aprender».